

Debatiendo la constitucionalidad del pin parental

Ignacio Álvarez Rodríguez¹

Profesor ayudante-doctor de Derecho Constitucional

Universidad Complutense de Madrid

ialvarez1@ucm.es

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El pin parental. Concepto y regulación. 3. El debate sobre la constitucionalidad del pin parental. 3.1. A favor de la inconstitucionalidad de la medida. 3.2. En contra de la inconstitucionalidad de la medida. 3.3. Luz al final del túnel: los argumentos ¿definitivos? 4. Conclusiones. 5. Bibliografía

1. Introducción

En el presente texto se aborda el debate sobre la constitucionalidad del denominado en los medios de comunicación “pin parental”, una medida que ha suscitado una polvareda bastante importante en nuestra sociedad, y no sólo política.²

En primer lugar, expondremos qué se entiende por tal cosa y cómo se ha regulado por la Autonomía que lo puso en marcha (la Región de Murcia).

¹ El presente texto sirvió de base a la ponencia invitada que el autor impartió en la Jornada *Constitucionalidad del pin parental. ¿Adoctrinamiento o educación en valores?*, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 5 de marzo de 2020, gracias a la invitación de la Unión de Estudiantes Progresistas-Estudiantes de Izquierdas (UEP-ei) y del Colectivo Feminista Athenea. Deseo agradecer públicamente los esfuerzos de todas las personas implicadas, especialmente de Irene Manzano, para que la Jornada fuera tan fructífera como fue. Además, el texto mejoró al escuchar lo que dijeron sobre el tema dos expertas como Ángeles Chinarro y Fuensanta Ortiz, así como gracias a las interesantísimas ideas que las asistentes compartieron en el turno de palabra.

² La expresión hace referencia a la posibilidad que los padres apliquen un veto a ciertas actividades escolares de sus hijos, al modo en que existe una clave para que no puedan acceder a determinados contenidos en plataformas televisivas digitales. Expone lo errado de la terminología GRIJELMO, Á; “Los tres problemas del pin parental”, *El País*, 2/3/2020.

También se hará alguna alusión a cuál es su situación actual, marzo de 2020, porque ha habido novedades procesales. En segundo lugar, recopilamos las opiniones de diversos constitucionalistas que se dividen en dos polos: los que creen inconstitucional la medida y los que creen que es compatible con la Constitución. Propondremos alguna vía intermedia entre ambas, que se inclina en realidad por la primera, pero no tanto por motivos de inconstitucionalidad sino por motivos de oportunidad. Finalizamos con unas conclusiones que sintetizen las posiciones en juego.

2. El pin parental. Concepto y regulación

El *pin parental* está recogido –no con ese nombre, claro está– en dos instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia, que dictó con motivo del inicio del curso 2019-2020. Consiste en la autorización expresa de los padres de las actividades complementarias que, dentro del horario escolar, imparta a sus hijos profesorado no funcionario ajeno al centro.

La polémica ha acompañado a esta medida desde hace meses, polémica que no parece ser sino la traducción de un combate ideológico y político sobre una realidad que se antoja mucho más pacífica en el discurrir cotidiano de nuestras escuelas. Volveremos posteriormente sobre la cuestión.

El Gobierno de la Nación dio un plazo determinado a la Comunidad Autónoma para retirar la medida y amenazó con impugnarla ante los tribunales si no lo hacía. El Gobierno de Murcia decidió no retirarla. En consecuencia, el primero ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, argumentando que el superior interés del menor queda por encima del derecho de los padres a autorizar las actividades. Actualmente el asunto está *sub iudice* en dicho órgano jurisdiccional. Se le ha dado un plazo a las partes para que hagan las alegaciones oportunas. Si al TSJ

no le convence lo que alegue el gobierno regional, la medida se podrá suspender, lo que significa que deja de aplicarse temporalmente. El Gobierno murciano también ha manifestado que, si los tribunales así lo dictaminan, retirará el pin parental.³

Con la medida disputada otra vez en la agenda política, se produjo un interesante debate doctrinal en los medios de comunicación y en las publicaciones científicas del Derecho Constitucional español. Parece sumamente interesante sintetizar el debate que se ha producido en ese sentido. Por ello este texto se centrará en los argumentos de los unos, de los otros y luego se expondrá el propio, no sin antes advertir al lector de que la exploración es tentativa y que, como buen tanteo de un neófito, es algo desordenada y errática.

3. El debate sobre la constitucionalidad del pin parental

No habría debate sin sana discrepancia. Debatir implica aceptar a priori al menos dos argumentos contradictorios. Así lo haremos aquí. Primero expondremos los argumentos que están a favor de la inconstitucionalidad del pin parental. Después haremos otro tanto con los argumentos que están en contra de dicha inconstitucionalidad. Finalmente, integraremos sintéticamente el que se antoja el criterio más adecuado para ayudarnos a encender la luz en un túnel por lo demás algo oscuro.

³ Vid. <https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-recurre-pin-parental-implantado-murcia-solicita-suspension-cautelar-tribunales-20200218162335.html> (consultado el 6 de marzo de 2020).

3.1. A favor de la inconstitucionalidad del pin parental

Dentro de este sector se recogen los criterios de tres profesores de Derecho Constitucional que recogen en buena medida el sentir general de esta parte de nuestra disciplina. Son los profesores Pérez Royo; Valero Heredia; y Salazar Benítez.

La opinión de Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, es bastante clara. Entiende que el veto es “claramente inconstitucional” sin ambages.⁴

Propone, así, el remedio procesal adecuado para atacar la medida: el artículo 161.2 CE.⁵ Activar esta vía goza, según su criterio, de dos ventajas. Una, que la medida queda automáticamente suspendida y, en consecuencia, deja de surtir efectos. Y dos, que obliga a ambos Gobiernos, nacional y autonómico, a argumentar los motivos de inconstitucionalidad y de constitucionalidad, respectivamente.

El profesor sevillano recuerda también algunos argumentos de oportunidad que conviene no perder de vista. Por ejemplo, recuerda que Murcia está gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos, no por Vox ni con Vox. Por lo tanto, entiende que el Partido Popular debe estar a la altura de sus responsabilidades de gobierno y comportarse como tal. Un argumento de oportunidad política, como se ve.

⁴ PÉREZ ROYO, J; “La respuesta constitucional al pin parental”, *eldiario.es*, de 20/1/2020 (en línea: https://www.eldiario.es/contracorriente/respuesta-constitucional-veto-parental_6_986961313.html. Consultado el 6 de marzo de 2020).

⁵ Artículo 161.2 CE: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

No es menos severa en su juicio la constitucionalista Ana Valero Heredia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien también entiende que la medida es “a todas luces inconstitucional”.⁶

En primer lugar, Valero desarrolla su argumentación en el marco de los compromisos internacionales de España (Convención Internacional de los Derechos del Niño) y del marco jurídico nacional (Ley de Protección Jurídica del Menor). En base a tales regulaciones la lectura que sólo cabe hacer según su mejor parecer es que debe prevalecer el interés del menor, que no es otro sino el de permitir que desarrolle libremente su personalidad, con la ayuda, la guía y la cooperación de sus padres. Estos, nos viene a decir nuestra constitucionalista, no son dueños absolutos –mucho menos absolutistas- de sus hijos.

La profesora Valero introduce una variante interesante porque es una de las que más juego da en esta materia. Esa es la objeción de conciencia. En principio, algunos padres alegan para apoyar la medida que, al igual que se reconoce en otros ámbitos, también podrían “objectar en conciencia” y que sus hijos no acudieran a las actividades educativas. Valero recuerda que para que se pueda hablar de una objeción constitucionalmente válida debería estar expresamente prevista por ley (como sucede en la Ley Orgánica sobre la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo de 2010, que se reconoce a los equipos sanitarios que no quieran participar en los abortos). A su juicio en el caso del pin parental no existe tal, porque ni siquiera está regulada por una norma con rango de ley.

El argumento se refuerza a la luz de algunos criterios sentados en la jurisprudencia constitucional sobre materia educativa, una jurisprudencia que es

⁶ VALERO HEREDIA, A; “El pin parental es inconstitucional”, *AlRevésyAlDerecho.es*, de 20/1/2020 (en línea: <http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5739>. Consultado el 6 de marzo de 2020).

de todo menos sencilla (quizá porque se tiene que interpretar un precepto como nuestro artículo 27 CE, que no es un dechado de claridad y sencillez).⁷ Por ejemplo, en la STC 133/2010, donde nuestro Juez de la Constitución decide sobre la (in)constitucionalidad de la práctica del llamado “home-schooling”, y donde se plasmaron algunos argumentos que Valero entiende aplicables por analogía al pin parental.

En materia educativa la sentencia reconoce que el derecho de los padres en ocasiones cedería no sólo ante ese *ideario educativo constitucional* –en feliz expresión que nos dejó Tomás y Valiente en su ponencia de la STC 5/1981- sino también ante la obligación de los poderes públicos de velar porque el educando socialice con el resto de compañeros. Esto es, no es solo que chicas y chicos tengan derecho a recibir una educación de calidad en cuanto a conocimientos, sino que también tienen el derecho de recibirla en un marco educativo formado por otros chicos y chicas, donde comenzar a entablar relaciones de amistad, de compañerismo, de sana competencia; en fin, de crear y participar de una comunidad educativa construida por todos.

⁷ Artículo 27 CE: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”. Un testigo de excepción ha dicho sobre el mismo que “estamos en presencia de uno de los preceptos más polémicos en la Constitución”, lo que se acreditó en el proceso constituyente con la publicación de muchos artículos en prensa y un activo movimiento social, político y popular que fue más allá de las Cámaras y que implicó a toda la sociedad. Vid. ALZAGA VILLAAMIL, Ó; *Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978*, Marcial Pons, Madrid, 2016 (2ª edición), p. 199.

A mayor abundamiento, Ana Valero entiende que medidas como el pin parental no casan bien con algunos criterios convencionales. En concreto con los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó en el asunto *Kokkinakis c. Grecia*, de 25 de mayo de 1993, donde se dijo que las actividades de proselitismo quedan amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, siempre y cuando no constituya un caso de “proselitismo tóxico”.⁸

Finalmente tenemos el criterio de Octavio Salazar Benítez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, quien estima que los derechos del niño deben prevalecer, lo que significa en este caso concreto que tienen derecho a disfrutar de sus libertades en democracia por encima de lo que opinen sus progenitores al respecto.⁹

Para el constitucionalista cordobés cuestiones tales como la igualdad de género, la diversidad afectivo-sexual y la lucha contra toda discriminación no son parte de una ideología concreta –la famosa “ideología de género” que el pin parental dice querer combatir- sino de la más elemental cultura democrática. De lo que se deriva, a su juicio, que la Constitución establece y concreta ese mínimo contenido educativo constitucional, que debe ser respetado en todo caso y que niños y adolescentes deben conocer. En síntesis: deben conocerlo porque es la forma en que se transmiten los conocimientos en democracia, educando en valores democráticos.

⁸ “Es indispensable distinguir el testimonio cristiano del proselitismo abusivo: el primero corresponde a la verdadera evangelización; el segundo representa la corrupción o deformación del mismo que no se concilia con el respeto debido a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de los demás” (STEDH *Kokkinakis c. Grecia*, de 1993).

⁹ Vid. SALAZAR BENÍTEZ, O; “El pin parental y el derecho a la educación”, *eldiario.es*, de 18/1/2020 (en línea: https://www.eldiario.es/zonacritica/pin-parental-derecho-educacion_6_985911403.html). Consultado el 6 de marzo de 2020).

3.2. En contra de la constitucionalidad de la medida

Aquí tenemos el criterio de algunos constitucionalistas que defienden, con diferentes argumentos, que el pin parental es una medida constitucional. O por lo menos, no acaban de ver claro que sea inconstitucional.

Por ejemplo, Germán Teruel Lozano, constitucionalista que ejerce en la Universidad de Murcia, entiende que estamos ante el libre juego democrático y que, en principio, el pin parental no supone una quiebra de norma constitucional alguna.¹⁰ El jurista murciano trae para apoyar su argumento la sentencia que dictó el Tribunal Supremo para decidir sobre la adecuación jurídica de la asignatura Educación para la Ciudadanía.¹¹

Aquí hace referencia a la STS 11.02.09. Rec. 905/2008, quizá el *leading-case*. Esta sentencia declara la licitud de la asignatura, estimando que los padres en ningún caso pueden imponer sus derechos por encima de la enseñanza básica obligatoria. Lo que interesa a Teruel es el siguiente razonamiento. Porque también dice el TS en esta resolución que, en base al artículo 27 CE, los padres tienen derecho a evitar el adoctrinamiento de sus hijos. Para saber dónde empieza unos y acaba la otra introduce una distinción. Declarando que enseñanza y democracia están unidos inexorablemente, la diferencia entre aquellos mensajes que todo educando debe conocer y aquellos que no tiene por qué saber, son los derechos fundamentales.

¹⁰ Vid. TERUEL LOZANO, G; "Pin parental e ideario educativo constitucional: una cuestión abierta al debate democrático", *XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, marzo de 2020 (en línea: <https://www.acoes.es/congreso-xviii/ponencias-y-comunicaciones/>. Consultado el 6 de marzo de 2020).

¹¹ El Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias, todas el 11 de febrero de 2009. Son la STS 11.02.09. Rec. 905/2008; la STS 11.02.09. Rec. 1013/2008; la STS 11.02.09. Rec. 948/2008; y la STS 11.02.09. Rec. 949/2008.

El primer grupo son los valores que dan base moral al sistema constitucional, traducidos en los derechos fundamentales. Estos son indisponibles y, por ende, los discentes deben conocerlos y los padres no podrían negarse a ello. No cabría hablar aquí de adoctrinamiento. El segundo grupo son el resto de valores, los que explican el pluralismo de la sociedad. Es aquí donde habría que guardar una exquisita prudencia y neutralidad, “informando y no adoctrinando sobre las principales concepciones culturales, morales o ideológicas que, más allá de este espacio ético común, puedan existir en cada momento histórico dentro de la sociedad y transmitir a los alumnos la necesidad de respetar las concepciones distintas a las suyas” (FD 6).

Dicho de otra forma, para Teruel no habrá adoctrinamiento en el primer caso, aplicando los criterios del Tribunal Supremo, siendo constitucionalmente lícito la exposición de tales valores en términos de promover la adhesión a los mismos (se puede hacer proselitismo). En el segundo caso, los valores discutidos y discutibles deben ser expuestos de manera rigurosamente objetiva y con la única finalidad de instruir; esto es, no cabría hacer proselitismo. Con las palabras de la propia sentencia: informar “con la más exquisita neutralidad y el más prudente distanciamiento” (FD 11).

Por su parte, el profesor de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo, en una entrevista radiofónica concedida a Carlos Alsina en Onda Cero manifestaba que el pin parental es un supuesto de objeción de conciencia,¹² objeción de conciencia que por lo demás estaría reconocida implícitamente en el derecho fundamental a la libertad ideológica, tal y como dijo el Tribunal Constitucional hace muchos años (STC 59/1985) y ratificó tiempo después (STC 145/2015). Lo que sería exigible de los poderes públicos, en concreto del Legislativo, es que,

¹² RUIZ ROBLEDO, A; “Entrevista”, *Onda Cero*, 24/1/2020 (en línea: https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/actividades-complementarias-pin-parental_202001245e2ab42f0cf2cd32febeb02d.html . Consultado el 6 de marzo de 2020).

regule el pin parental por Ley en aras de la claridad y seguridad jurídica (criterio en el que también coincide Teruel Lozano).

Además, el jurista granadino recuerda dos cosas de cierta importancia. La primera es que la Ley de Educación de 2007 configuró las actividades complementarias como voluntarias, de lo que se deduce que se puede elegir ir o no ir y, cuando se elija, en función de la etapa educativa, los padres tendrán algo/bastante/mucho que decir. La segunda es que después de hacer un repaso a las principales actividades que se llevan a cabo en la vida real, descubre que estas no son sino una al mes, como mucho. Dicho con otras palabras: estamos teorizando sobre cosas que en la práctica no está dando realmente quebraderos de cabeza.

3.3. Luz al final del túnel. Los argumentos ¿definitivos?

Las líneas anteriores demuestran que el debate está servido en la doctrina. Quedaría incompleto y algo huérfano si no hacemos llegar al lector el criterio que creemos ha marcado una línea interesante. Es el de Fernando Rey Martínez, quien ofrece no sólo el criterio del experto (es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid) sino el criterio de quien tiene amplia experiencia sobre el terreno (fue Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León). Doble experiencia y doblemente aquilatada.

El profesor Rey ofrece una serie de argumentos a tener en cuenta.¹³ Después de hacer un repaso concienzudo y realmente abrumador sobre las principales polémicas constitucionales educativas que se han sucedido en España en los

¹³ Véase REY MARTÍNEZ, F; "El ideario educativo constitucional: objeto de enseñanza y parámetro de validez del sistema educativo", *XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, marzo de 2020 (en línea: <https://www.acoes.es/congreso-xviii/ponencias-y-comunicaciones/>. Consultado el 6 de marzo de 2020).

últimos quince años, Fernando Rey cree algunas cosas que obligan a la reflexión.

En primer término, Fernando Rey recuerda que debemos ser conscientes de que en gran medida el debate teórico y judicial sobre el ideario educativo constitucional no se corresponde con la realidad diaria de las aulas españolas, donde la cuestión es mucho más pacífica y se gestiona sin grandes conflictos. Es un dato a tener en cuenta.

En segundo lugar, nos ilustra sobre lo el hecho de que en colegios e institutos se celebran a diario actividades curriculares y extracurriculares que giran sobre la enseñanza de los valores democráticos y –esto lo añadimos nosotros- no ha caído el cielo sobre la tierra ni han sobrevenido plagas ni nada por el estilo. Tales valores se han concretado en enseñanzas sobre una educación en los valores igualitarios y no discriminatorios, así como en los medioambientales. Cuestión diferente es que haya que afinar el tiro e introducir dosis de coherencia en el itinerario educativo de los alumnos porque tales valores no están enseñando con la misma coherencia ni con la misma intensidad en todas las etapas educativas.

¿Cómo? Explotando las posibilidades pedagógicas del art. 27.2 CE. Fernando Rey entiende que eso implica una “alfabetización democrática” de nuestros alumnos que va mucho más allá de la mera “alfabetización constitucional”. Conviene retener esta idea porque a buen seguro son los mimbres de una mejora educativa de primer orden.

Respecto al pin parental en concreto, recuerda que si hubiera excesos en tales actividades los padres han tenido, tienen y tendrán las puertas de los tribunales abiertas. A su juicio estamos ante un problema artificial, que no existe en la realidad. De hecho, recuerda que el Presidente del Gobierno murciano, cuando saltó la polémica, confesó que no había un solo caso de adoctrinamiento ideológico denunciado en escuela murciana alguna.

El profesor Rey entiende que en el pin parental confluyen los tres males de la educación –ignorancia, inercia e ideología- más un cuarto –la imaginación- porque “se trata del abordaje de un problema que no existe sino sólo como un grumo ideológico/mental de algunos”.¹⁴ Entiende que la realidad de las aulas en España es mucho menos conflictiva de lo que la medida propuesta da a entender.

Cierra con una reflexión que deja pensando: “Hablamos de educar a los escolares en los valores democráticos y ellos se desayunan todos los días con casos de corrupción, debates no respetuosos, espectáculos mentirosos, broncos y agresivos por parte de bastantes actores políticos, algunos de ellos de la mayor responsabilidad”.¹⁵

4. Conclusiones

Creemos que, por lo dicho en líneas anteriores, el pin parental es una medida discutida y discutible desde el punto de vista constitucional. No tenemos claro de qué lado puede decantarse la balanza, aunque sí creemos que, al menos desde el punto de vista de su oportunidad, parece que estamos ante el enésimo caso de *tormenta en vaso de agua*.

Finalmente, algunas preguntas se imponen ¿De verdad no vamos a aceptar que nuestros hijos hoy –que serán los adultos del mañana- vean otras opciones como igual de buenas –o de malas- que las nuestras? ¿De verdad que no queremos que tengan unos mínimos de reconocimiento del diferente, del otro? ¿De verdad creemos que la democracia sobrevivirá sin cultivar demócratas?

¹⁴ Vid. REY MARTÍNEZ, F; “El ideario...”, *cit*, p. 23.

¹⁵ Vid. REY MARTÍNEZ, F; “El ideario...”, *cit*, p. 23.

Tal y como dice Grijelmo, “llaman pin parental a un veto paterno contra una parte del conocimiento humano. Pero el pin, según lo entendíamos hasta ahora, es una clave de acceso que permite entrar. Y aquí estamos ante una clave de retroceso que impediría salir”.¹⁶

5. Bibliografía

ALZAGA VILLAAMIL, Ó; *Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978*, Marcial Pons, Madrid, 2016 (2ª edición).

GRIJELMO, Á; “Los tres problemas del pin parental”, *El País*, 2/3/2020.

PÉREZ ROYO, J; “La respuesta constitucional al pin parental”, *eldiario.es*, de 20/1/2020.

REY MARTÍNEZ, F; “El ideario educativo constitucional: objeto de enseñanza y parámetro de validez del sistema educativo”, *XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, marzo de 2020.

RUIZ ROBLEDO, A; “Entrevista”, *Onda Cero*, 24/1/2020.

SALAZAR BENÍTEZ, O; “El pin parental y el derecho a la educación”, *eldiario.es*, de 18/1/2020.

TERUEL LOZANO, G; “Pin parental e ideario educativo constitucional: una cuestión abierta al debate democrático”, *XVIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, marzo de 2020.

VALERO HEREDIA, A; “El pin parental es inconstitucional”, *AIRevésyAIDerecho.es*, de 20/1/2020.

¹⁶ Vid. GRIJELMO, Á; “Los tres...”, *cit.*

